



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Juzgado Civil Municipal
Madrid Cundinamarca
Carrera 7ª N° 3-40

PROCESO	VERBAL SUMARIO DE CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL
DEMANDANTE	PABLO ANFRÉS POSADA VASQUEZ
DEMANDADA	DOLFY YANETH GONZALEZ RUBIO
RADICACIÓN	2543040030012022 - 0754

Madrid, Cundinamarca, junio treinta (30) de dos mil veintitrés (2023). –

Ante la inexistencia de pruebas que decretar o practicar se proferirá sentencia anticipada total en cuanto los medios allegados constituyen el único recaudo probatorio que determina la resolución inaplazable de la instancia, sin que pueda o deba asumirse trámite diverso, justificándose el incumplimiento de las etapas previas y ordinarias con las que deben tramitarse los procesos en cuya reglamentación se impuso que la celeridad y economía medulares en el fallo anticipado primen sobre las condiciones generales cuando concurren como en la situación anunciada las excepcionales hipótesis que habilitan la resolución de la controversia en forma delantera, sin la común y ordinaria audiencia ni tampoco con la sentencia oral, que ante las excepciones anunciadas y particularmente en situaciones como la presente imponen una resolución de fondo por anticipado que impiden consolidar la fase escritural y determinan intrascendente y sin objeto la audiencia para resolver la instancia conforme los siguientes

ANTECEDENTES

Al verificarse la actuación, se define la primera instancia del proceso que por interpuesto apoderado PABLO ANFRÉS POSADA VASQUEZ promueve contra la parte demandada DOLFY YANETH GONZALEZ RUBIO, para cuyo propósito la secretaría ingresó el expediente, en el que se promueve proceso VERBAL SUMARIO DE CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL contra el extremo pasivo para obtener la custodia, cuidado definitivo y exclusivo de la menor ANDREA NICOL POSADA GONZALEZ y las costas con agencias en derecho que se generen por razón del trámite del proceso.

El tres (3) de junio de 2022, se profirió el admisorio que evidenció la parte demandada DOLFY YANETH GONZALEZ RUBIO, quien se opuso a las pretensiones admitiendo el vínculo conyugal, la conciliación, la custodia conciliada, los procesos y la obligación alimentaria, negó los restantes hechos indicando que la accionante le impide ejercerlos y mantener una adecuada relación con su hija a quien le prodiga el adecuado trato. El apoderado judicial de la parte demandante PABLO ANFRÉS POSADA VASQUEZ, al verificarse el traslado de la réplica artículo 369 y 370 del estatuto procesal ibidem, guardo silencio.

Bajo tales condiciones, advirtiéndose la inexistencia de solicitud probatoria irresuelta y el desinterés de las partes en solicitarlas, culminó dicho estadio procesal, para dar paso a la etapa de la resolución en cuanto ni las partes ni sus apoderados exteriorizaron reparo frente al trámite y sin advertirse causal de nulidad que invalide el proceso o causal que impida una decisión de fondo, se resuelve la controversia y la pertinencia

de la oposición propuesto, con la determinación que se promulgará de acuerdo a la siguiente:

SENTENCIA

En las condiciones del inciso tercero del artículo 278 del Código General del Proceso, se define la instancia del proceso de la referencia mediante la presente sentencia anticipada, frente a cuyo trámite no existe petición probatoria irresuelta, materializando la situación prevista por la reseñada disposición, que habilita la resolución de la controversia bajo las condiciones del artículo 3° del Código General del Proceso, porque atendiendo la presencia de sus requisitos, la naturaleza de la presente actuación y las pruebas requeridas para la resolución del asunto, debe dirimirse la instancia mediante una decisión como la anunciada bajo cuyas condiciones se definirá conforme las siguientes

CONSIDERACIONES

Se define la presente instancia, toda vez que la relación jurídico procesal aparece legalmente conformada, los denominados presupuestos procesales concurren a cabalidad en el presente proceso, al perfeccionarse en lo posible el recaudo probatorio y las diversas etapas procesales, que preceden la definición de la instancia, seguidamente se ponderan las pruebas para sustentar la determinación, toda vez que no se advierte causal de nulidad que invalide lo actuado o la ausencia de presupuesto procesal que impida un pronunciamiento de fondo para cuyo evento se procede.

ANTECEDENTES

Mediante acción de custodia y cuidado personal, por interpuesto apoderado PABLO ANFRÉS POSADA VASQUEZ, pretende que, previos los tramites del proceso verbal sumario, se profiera sentencia definitiva que declare en su favor la custodia única exclusiva de la menor ANDREA NICOL POSADA GONZALEZ, junto a las costas del proceso.

Aduce la parte demandante como razón fáctica de sus pretensiones, que por la relación que subsistió con la parte demandada, procrearon a ANDREA NICOL POSADA GONZALEZ quien por permanecen bajo su cuidado en cumplimiento de acuerdo conciliatorio, cuyos términos desconoce la parte demandada al omitir la solución de la obligación alimentaria, generando controversias y maltrato, que determinaron el trámite de un proceso, que se agrava la indefensión de la menor y su progenitora a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones alimentarias que están a cargo de la parte demandada. Por tales circunstancias, pretende la custodia para facilitarle a la menor una formación integral que garantice sus derechos y particularmente, mejore sus condiciones de vida en cuanto el actual domicilio del demandante le permite proveerle una adecuada educación y estabilidad.

Se avoco el conocimiento de la demanda mediante proveído del tres (3) de junio de 2022, cuya ejecutoria determinó la vinculación personal de la parte demandada al notificarse mediante abogado de amparo del

admisorio el pasado 11 de julio, desplegando su defensa oponiéndose a las pretensiones reclamando el pago oportuno de las cuotas alimentarias, atribuyéndole a la parte demandante responsabilidad en cuanto al cumplimiento del régimen de visitas acordado en cuanto le impide compartir con el menor, resistencia que justificó la intervención de la policía para desplegar su derecho.

Con el decreto 2272 de 1989 se instituyó la jurisdicción de familia, que reglamento en su artículo 5° literal D), la competencia para dirimir "...la custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los menores..." a los Jueces de Familia como asunto que deba ventilarse mediante el proceso de única instancia. No obstante atribuirse el conocimiento del presente asunto a los Jueces de Familia, la norma procesal en comento señaló que en defecto de los anteriores funcionarios y para los municipios donde aquellos no existan, serán los Jueces Civiles Municipales los competentes para conocer los atribuidos a aquellos en única instancia, tal como, recientemente lo dispuso el artículo 4° de la Ley 794 de 2003, y lo contempla el numeral 6 del artículo 17 y numeral 3° del artículo 21 del Código General del Proceso, circunstancia esta que, en concurrencia con el factor territorial determinado por el domicilio del menor (artículo 8° del estatuto ibidem), le permite a este Despacho asumir la competencia necesaria para dirimir el presente asunto. Sin duda alguna y bajo las previsiones dispuestas para los procesos de única instancia, es posible proveer una decisión de fondo que pondere la prosperidad o decaimiento de las pretensiones.

DEMANDA EN FORMA. Concurren en la demanda, las formalidades dispuestas por los artículos 75, 76 y 77 del estatuto procesal civil para habilitar la probidad de la exigencia contenida en las pretensiones. Igualmente resulta necesario precisar que se acreditó el presupuesto de procedibilidad dispuesto por la ley 640 de 2001, mediante la documental donde igualmente se citó a la demandada para tramitarla, pero sus irreconciliables aspiraciones determinaron fallido dicho proceder en procura de la solución concertada de la presente controversia.

CAPACIDAD PARA OBRAR PROCESALMENTE. Se encuentra referida a las condiciones exigidas para que la parte demandante litigante constituya la parte hábil del proceso, es decir, agotadas las condiciones necesarias para que, a través del derecho de postulación, funja en debida forma como representantes judiciales de los inhábiles o de las personas jurídicas. Concorre en el demandante, la vocación necesaria para desplegar el poder jurisdiccional del Estado, en pro de la menor por custodiar ANDREA NICOL POSADA GONZALEZ.

CAPACIDAD PARA SER PARTE. Constituye la garantía necesaria para que la decisión de instancia produzca efectos inter pares, es decir, solo en cuanto aquellos sujetos de derecho que actúen como partes en el proceso en su doble aspecto de demandantes o demandados, se trate ya de personas naturales, jurídicas o de alguno de los patrimonios autónomos que por virtud de la ley tienen dicha vocación para acudir al proceso, siempre que les asista el derecho de reclamar o accionar en razón de las pretensiones. Tanto el actor como la demandada, por si son personas

hábiles, mayores de edad, sujetos de derechos y obligaciones quienes bien pueden, como acontece en el presente asunto, accionar o excepcionar respecto de la situación contenciosa que nos ocupa.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. Es la parte demandante quien, por beneplácito de la ley y su particular interés en el resultado del proceso, es la llamada a instaurar la demanda y por ello legitimado para pregonar que se satisfagan sus aspiraciones, en tanto se consciente por la contraparte la idoneidad y capacidad funcional que la ley le señala. Tampoco la parte demandada al contar con la oportunidad procesal correspondiente, notició inconformidad alguna respecto a la inviabilidad procesal de la exigencia planteada como de su cargo. Se evidencia entonces, que, en el presente asunto, concurren cabalmente los presupuestos procesales que posibilitan una determinación de fondo, pues, además, no se advierte en el proceso, ni se acredita la existencia de ninguna causal de nulidad que así lo impida.

La prueba en el proceso, como lo reitera la jurisprudencia, además de reconstruir la historia del objeto debatido sobre el que se reclama solución, es el único camino que posibilita al juez la capacidad de discernir el marco legal aplicable a una particular situación, atribuyéndole en consecuencia a dicho análisis los efectos jurídicos pretendidos con la demanda y dentro de los cuales, gravitara la competencia del funcionario, para respetar la necesaria congruencia que debe mediar entre lo pretendido y el objeto de la decisión.

Corresponde entonces a las partes, además de promover y fijar con la demanda el alcance de las acciones judiciales, impulsarlas aportando los elementos probatorios que regular y oportunamente deben allegar para sustentar la determinación, tal como lo exigen los artículos 164 y 167 del estatuto procesal civil.

DEL RECAUDO Y ANÁLISIS PROBATORIO. Con la demanda se aportaron los siguientes documentos:

1. Copia acta de conciliación 004-1-21 de la Comisaria Primera de Familia de Madrid del 10 de febrero de 2021, en la que se dispone la cuota alimentaria al demandante, se dispone la custodia compartida de la menor, los gastos compartidos de educación, salud, vestido a cargo del demandante.-
2. Fotos de la menor en la residencia de sus progenitores.
3. Copia del acta de registro civil de nacimiento de ANDREA NICOL POSADA GONZALEZ.
4. Certificación académica que reporta su vinculación el pasado año al grado de transición.
5. Constancias médicas de la atención dispuesta a la menor.
6. Certificación laboral del demandante.

Prevalido de los reseñados medios probatorios, se resolverá la instancia considerando que los derechos de los niños comportan una primacía constitucional para propiciarles el derecho de contar y crecer en una familia, en las condiciones del artículo 6° del código del menor. Precisamente ese ámbito constitucional condiciona el que su separación solo se posibilite como una medida extrema, siempre que concurren las circunstancias especiales definidas por la ley, las cuales, debidamente ponderadas, determinaran la gravedad del peligro que afronta el menor y la necesidad de protegerlo mediante la remoción inmediata de las causas que amenazan su integridad.

No en vano el artículo 42 de la Constitución Política, erige la familia como núcleo fundamental de la sociedad, reclama su protección, determina un plano de igualdad en los derechos y obligaciones de la pareja y proscribire cualquier forma de violencia para preservar su unidad, dotando a los menores de una familia para garantizarles el derecho a no ser separado de ella. Tales derechos comportan entonces, que ellos y por razón de protección especial, determine en grado sumo, la decisión que deba adoptarse respecto a su cuidado y protección, deber este, plasmado en el artículo 9° Numeral 1°. De la Convención de los Derechos del Niño, donde se erige como obligación de los Estados que ratifiquen su aplicación, el velar;

“...porque los niños no sean separados de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la Ley y los procedimientos aplicables, que tal determinación debe ser aplicable en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando estos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

(...)

Los Estados Parte respetaran el derecho del niño que este separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño...”¹

No obstante que la unidad familiar se preserva cuando en forma armónica conviven bajo un mismo refugio los padres con sus hijos, no son pocas y menos frecuentes las situaciones en las que el conflicto familiar rompe esa unidad, determinando la separación de los padres quienes, la mayoría de las veces caprichosamente procuran que los menores avalen su conducta y los respalden en sus nuevas relaciones, presionándolos incluso para generarles odios y celos, por uno u otro padre. Bajo esa circunstancia, los niños como centro de protección se desplazan para utilizarlos y satisfacer los mezquinos intereses generados entre la pareja como retaliación por el fenecimiento de la relación.

No es raro ver entonces a los menores en la mitad de una controversia jurídica, que en la generalidad de las ocasiones no entienden, para acrecentar, respaldar o enervar, la determinación de sus progenitores de buscar además de su propio beneficio y comportamiento retaliatorio, menoscabar los derechos del ex-compañero propiciando que sumisamente y sin contraprestación ninguna se los prive de ejercitar sus deberes aún en detrimento del menor, quienes bajo la mendaz aspiración de protección, dejan de ser el fin del proceso y se convierten, sin reparo, en las víctimas de los procesos en cuanto afrontan los perjuicios emocionales y la incertidumbre generados por la disputa, producto de un

¹ Convención de los Derechos del Niño. Nov 20 de 1989. Ratificado Ley 12 de 1991.

medio de presión y subterfugio para satisfacer los ánimos de agravio entre la pareja.

No se trata entonces, con el objeto de impedir tan nocivos efectos al menor que el proceso se promueva con tan mezquino interés, y por eso cautelando la integridad del infante, le corresponde al funcionario determinar no solo el incumplimiento a las obligaciones de padre o madre, sino valorar y establecer su gravedad y la pertinencia de sus consecuencias, sin cuyo juicio difícilmente podrá concertarse una decisión que verdaderamente satisfaga el interés de preservar la integridad y adecuada formación de los menores, cuyo único objetivo, es el que por definición legal le corresponde a esta clase de procesos.

El abandono de los deberes por parte de los padres para con los hijos, determina la pérdida de la custodia y cuidado personal, conforme el artículo 26 de la ley 45 de 1936, cuyo aparte pertinente establece

“... Cuando haya abandono de los deberes de los padres para con los hijos, estos serán puestos, por orden del juez a costa de los padres, en casa o establecimiento competente. El mismo juez, atendidas las fuerzas patrimoniales de cada uno de los progenitores, regirá la contribución...”.

Se tiene entonces, que el ejercicio de la custodia y cuidado personal exige de los padres del menor o de quienes pretenden sustituirlos, el cumplimiento de una serie de conductas, deberes, obligaciones y cualidades que de no satisfacerse con mediana diligencia, generan inexorablemente un vacío o deficiencia en los cuidados y la atención requerida por el infante, generándose una situación de abandono que habilita al juez para removerlos en su ejercicio y procurar que otros suplan esas deficiencias, para asegurarles una adecuada formación integral. Es precisamente esa potestad la prevista por el artículo 254 del código civil, cuyo texto refiere que:

“... podrá el Juez en caso de inhabilidad física o moral de ambos padres confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona, o personas competentes...”

Sobre la dicha facultad, jurisprudencialmente la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, precisó:

“... el incumplimiento de las obligaciones asistenciales familiares alimentarias y morales, ocasiona no solo responsabilidad patrimonial o civil, sino que altera el orden público en todos y cada uno de sus elementos con mayor o menor intensidad...”²

Advertidos ya sobre el objeto de la presente acción, se tiene entonces, que la parte demandante PABLO ANFRÉS POSADA VASQUEZ pretende, mediante este mecanismo, que le otorguen la custodia, cuidado definitivo y exclusivo de la menor ANDREA NICOL POSADA GONZALEZ, por razón de una situación incierta e indemostrada, pues tal como lo aduce en la demanda, el abandono, maltratos reportados e incumplimiento de las obligaciones de la parte demandada que le reprocha entre otras cosas por el incumplimiento del pacto acordado sobre las cuotas y visitas de la menor y cuotas alimentarias, debieron acreditarse en forma plena, pues de tal incumplimiento en forma continua y reiteradamente se genera la controversia, que bien entiende este Despacho, puede ser constitutiva de las posibles conductas proscritas por las causales 1ª y 2ª del artículo 315 del código civil, pues si bien la parte demandante no las indica en su demanda, puede concluirse tal aspiración conforme el contenido de los

hechos planteados en la demanda que bien corresponden a las siguientes condiciones: la parte demandada desconoce la custodia dispuesta en cuanto además de maltratarlos físicamente, incumple sus obligaciones alimentarias generando conflictos que determinaron que se impartieran medidas de protección, el incumplimiento del pago de una cuota alimentaria modificada y las constantes amenazas para impedirle tranquilamente habitar con su hija, agrediéndoles en la forma que documenta la queja interpuesta.

Conforme la anterior relación bien puede concluirse que la parte demandante reclama por lo menos 2 de las causales descritas en por el citado artículo 315, cuyos términos se concretan en las siguientes situaciones:

“...Artículo modificado por el artículo 45 del Decreto 2820 de 1974. La emancipación judicial se efectúa, por decreto del juez, cuando los padres que ejerzan la patria potestad incurran en alguna de las siguientes causales:

1a) Por maltrato del hijo

2a) Por haber abandonado al hijo.

3a) Por depravación que los incapacite de ejercer la patria potestad.

4a) Numeral adicionado por el artículo 10 del Decreto 772 de 1975. Por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior a un año.

5) Numeral adicionado por el artículo 92 de la Ley 1453 de 2011. Cuando el adolescente hubiese sido sancionado por los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual y se compruebe que los padres favorecieron estas conductas sin perjuicio de la responsabilidad penal que les asiste en aplicación del artículo 25 numeral 2 del Código Penal, que ordena.

En los casos anteriores podrá el juez proceder a petición de cualquier consanguíneo del hijo, del abogado defensor de familia y aun de oficio...”³

Debe precisarse, de acuerdo a los hechos de la demanda, se procura acreditar que los múltiples conflictos emocionales generadas por la parte demandada afectan la salud mental de la menor, a consecuencia de la multiplicidad de acciones judiciales o administrativas promovidas contra la parte demandante.

Veamos entonces, como quiera que taxativamente la ley establece las condiciones que determinan la pérdida de custodia de los hijos, si tales circunstancias concurren en el proceso para determinar su ocurrencia, características y las consecuentes sanciones, sin olvidar eso sí, que el principio de la carga probatoria le impone a la demandante la obligación de demostrarlas para viabilizar el reproche pretendido con su demanda, que debe respaldarse en las condiciones descritas por el transcrito artículo 315 del código civil.

La Carta Política impone un interés superior y una prevalencia de los derechos de los menores cuya trascendencia y alcances reiteró la Corte Constitucional entre múltiples determinaciones con los siguientes términos:

“...Como se indicó en precedencia, el pilar fundamental para tomar cualquier decisión en la que se encuentre un menor de por medio, debe ser el interés superior de éste. Por tal razón, la aplicación formalista de la legislación no puede vulnerar sus derechos, y por el contrario debe maximizar los mismos.

En este aspecto la Corte manifestó en la sentencia T-1021 de 2010 que “los criterios que deben regir la protección de los derechos e intereses de los niños, a saber: (i) la prevalencia del interés del niño; (ii) la garantía de las medidas de protección que requiere por su condición de niño; (iii) la previsión de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, en condiciones de libertad y dignidad. Lo anterior, significa que es ineludible rodear a los niños de garantías y beneficios que los protejan en su proceso de formación.”

Los señalados criterios fueron ratificados por esta misma Corporación mediante la sentencia T-689 de 2012, en la que expresó:

“el interés superior del menor, no se identifica, necesariamente, con aquello que alguno de los padres, o quien tenga la custodia, pueda considerar mejor para su hijo. **Para** que realmente pueda **limitarse el**

³ Mediante Ley 0294 de 1996, se previene, remedia y sanciona la violencia intrafamiliar. Fue modificada parcialmente por la Ley

derecho de padres e hijos a sostener relaciones personales y contacto directo en nombre del interés superior del menor, es necesario que se reúnan, al menos, las siguientes cuatro condiciones: (i) el interés del menor debe ser real, es decir, debe fundarse en sus verdaderas necesidades y en sus particulares aptitudes físicas y psicológicas; (ii) el interés del menor debe ser independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la simple opinión subjetiva o de la mera voluntad de los padres o de los funcionarios encargados de protegerlo; (iii) dado que el interés del menor se predica frente a la existencia de intereses en conflicto de otra persona, su defensa debe someterse a un ejercicio de ponderación guiado por la preferencia de este principio; y (iv) debe demostrarse que la protección del interés invocado tiende necesariamente a lograr un verdadero beneficio para el menor, consistente en su pleno y armónico desarrollo”.

De conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política, se puede colegir que el retorno de la menor constituye un riesgo para su bienestar psicológico y emocional, en razón a las potenciales implicaciones adversas respecto de su desarrollo armónico e integral que se derivarían por el desprendimiento de su actual entorno de vida y la dificultad que podría presentar el proceso de adaptación en el territorio argentino.

Por lo anterior, como lo relacionó la psicóloga Ángela María Montealegre en su informe del 13 de abril de 2015, “la separación conyugal no solo es vista como una situación de crisis que perjudica psicosocialmente a los niños, sino que en muchos aspectos puede ser también una opción favorable para el bienestar de los hijos”^[52].

Es así que no se estima apropiado someter a la menor a la restitución a un ambiente completamente extraño para ella y potencialmente hostil, el cual puede traer una serie de repercusiones, debido a confrontaciones entre sus progenitores, quienes ahora se encuentran distanciados, pero que al momento del regreso de la niña a Argentina pueden llegar a agudizar sus diferencias y disputas, en detrimento del bienestar de la hija común, toda vez que como se ha demostrado a lo largo del proceso de restitución internacional de la menor, ambos padres pretenden la custodia de la niña y el retorno implicaría que la disputa se desplazaría a la República Argentina sin que se solucione el tema de fondo, el cual deberá ser analizado por la autoridad competente.

Teniendo en cuenta que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué no tuvo en cuenta el material relacionado con la adaptación que presenta la niña V.I.L.N a su entorno en el territorio nacional y que el desprendimiento del mismo podría generar un riesgo para la menor. Con base en el interés superior del menor, esta Corte discierne un riesgo asociado a ordenar la restitución de la niña y sustraerla de un ambiente apto para su desarrollo armónico –como está probado que es éste en el que actualmente se encuentra, donde ha venido afianzando su vínculo con la familia materna y donde se encuentra adelantando sus estudios–, a la merced de un resultado incierto que pueda presentarse en un entorno nuevo y desconocido, desposeída de sus allegados y del espacio donde ha logrado desenvolverse a plenitud...”⁴

En consecuencia, además de verificarse el cumplimiento de la parte demandante del principio de la carga probatoria dispuesto por el artículo 164 del Código General del Proceso, se atenderá, conforme el precedente constitucional transcrito, si su aspiración satisface las exigencias relacionadas con que sus pretensiones procuraran garantizar el interés superior de la menor, si actúa en procura de unas medidas de protección para dotarla de los medios adecuados para asegurar su desarrollo mental, moral, espiritual y social porque solo de tal forma se materializa el interés superior de aquellos, materializando su prevalencia incluso sobre los derechos que puedan corresponder a sus progenitores resolviendo la custodia de acuerdo a las pruebas practicadas y otorgándosela a quien reúna las mejores condiciones, siendo posible retirarla frente a quien, conforme tales pruebas, incumpla tales deberes en las condiciones prescritas por el legislador.

Como lo pretendido por la parte demandante es el reconocimiento exclusivo de la custodia y cuidado personal de ANDREA NICOL POSADA GONZALEZ por razón del incumplimiento de las obligaciones que le reclama la parte demandada DOLFY YANETH GONZALEZ RUBIO, la decisión por adoptar se impartirá en consideración al bienestar físico, psicológico y posterior desarrollo de la menor, asignándosela a quien mejores condiciones de vida le procure (artículo 255 del código civil).

Se dijo ya que la demanda no precisa en forma unívoca el carácter de la causal que sustenta las pretensiones, porque los hechos del libelo, contienen una circunstancia que aparentemente acontece, sin precisar su naturaleza, la época de ocurrencia, ni las consecuencias espacio temporales que permitan identificarla. Indistintamente que los hechos anunciados en la demanda sean constitutivos de una causal de las que

⁴ Sentencia T-006/18. Referencia: Expediente T-6.346.922. Acciones de tutela formuladas por MARÍA LUISA NIEVES CASTRO [1] en representación de la menor V.I.L.N[2] y por la Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal Gaitán de Ibagué, YENNIFER RUIZ GAITAN, contra la Sala de decisión Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS. 26 de enero de 2018. Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional.

señala el legislador para remover la custodia, adviértase que la misma en lo que expone la parte demandante, consiste en acreditar, de acuerdo con las causales primera y segunda del citado artículo 315, en el abandono de la parte demandada de su hija y el maltrato al que la somete, bajo cuyas condiciones la parte demandante deriva una afectación mental de la menor ANDREA NICOL POSADA GONZALEZ.

Bajo tales condiciones desde ya se advierte que de ninguna manera tal supuesto se enmarca dentro de las causales anteriormente anunciadas, y a diferencia de lo expuesto sobre las causales, dejando por ahora de lado la controversia que genera la presencia de esas circunstancias, adviértase que las pruebas aportadas únicamente dan cuenta, que se invoca la pretensión en la profusa gestión judicial o administrativa desplegada por la accionada para solucionar los problemas que se suscitan con las partes.

En procura de tal aspecto, considérese además que, en forma concomitante con el inicio del presente proceso, tampoco la parte demandante acreditó un acontecimiento que materialice recientemente los hechos alegados como extintivos de la custodia de su demandada y quizás a falta de proximidad de los mismos se dificulta la prueba de las razones sustentan la pretensión en cuanto que la parte demandante le reprocha a su contraparte la comisión de los hechos que soportan las medidas de protección y el incumplimiento del suministro de una cuota alimentaria.

Conforme la relación de documentos dispuesta, se advierte que la medida de protección es mutua, en manera alguna se constriño a alguna de las partes en forma exclusiva para beneficiar a su contraparte, bajo cuyas condiciones en manera alguna puede censurarse desde el punto de vista legal dicho comportamiento para definir la custodia en cuanto se la existencia de dichos procesos en manera alguna habilita una doble sanción, que tampoco puede impartirse ahora en cuanto que no existe un comportamiento acreditado que demuestre la reincidencia en tales conductas.

Tampoco el incumplimiento en el reconocimiento de la cuota alimentaria, determina la causal requerida para definir la custodia en cuanto la afectada bien dispone de elementos y acciones idóneas como la ejecutiva para forzar la idoneidad de tal suministro, que en la relación expuesta bien se acredita que no es absoluto y de alguna forma la parte demandada satisface algunas de las cuotas que se causan en favor de la menor, precisándose que en los términos de la documental allegada dicha obligación fue impuesta al demandante, quien igualmente se abstuvo de reclamar o acreditar que dicha obligación fue sustituida, cuyo descuido indudablemente determinan el fracaso de la carga probatoria en cuanto dicho lapso no solo determinó la imposibilidad de acreditar un hecho actual sino que las diversas conciliaciones que se reportaron durante dicho lapso igualmente desvirtúan la responsabilidad reclamada a la accionada.

En cuanto a la causal segunda, la referida al abandono de la menor que se le reprocha con la demanda, debe precisar que no existe prueba del

mismo, porque atendiendo el contenido de la demanda, el accionado acudió a las autoridades denunciando el incumplimiento del régimen de visitas que evidencia el interés y preocupación del mismo, hasta el punto que la propia parte demandante señala que esa precisamente constituye la causa de los enfrentamientos y desavenencias suscitadas, exteriorizando algún interés por su hija desvirtuando el reproche que le proponen con la demanda frente al abandono propuesto.

De otra parte, conviene precisar que dentro de las documentales aportada con la réplica, en la constatación de la denuncia se recomienda la imposición de una medida de protección, atendiendo un trámite anterior, pero en manera alguna determina la responsabilidad de alguna de las partes.

Tampoco puede derivarse del incumplimiento de las obligaciones alimentarias de la parte demandada la causa que justifique la pérdida de la custodia como quiera que frente a dicho incumplimiento, al margen de su ocurrencia, la parte demandante se muestra renuente y desinteresada en precaver y desplegar las acciones judiciales respectivas frente a dicha carga, por manera que frente a tal aspecto también se omite la prueba que sobre tal aspecto debió satisfacer la parte demandante, precisándose además que tal omisión por sí sola no conlleva la pérdida de la custodia en el progenitor incumplido dado el análisis que debe efectuarse para desvirtuar la justa causa que exige el tipo penal para configurar responsabilidad por tal aspecto, en el que además, no existe evidencia de requerimiento o el despliegue de los mecanismos ordinarios de defensa que la legislación dispone para vencer tal resistencia.

Reiterando lo expuesto, debe considerarse además que los documentos aportados con la réplica evidencian el interés de la parte demandada en desplegar los mecanismos dispuestos para contactar a su hija, en cuanto despliego infinidad de acciones que fracasaron a consecuencia de la oposición de la parte demandante y que al margen de tal conducta, considerando que PABLO ANFRÉS POSADA VASQUEZ aportó copias de las actuaciones que dispuso, en forma más reciente su demandada si acreditó que procuró contactarlos, los cito y les enviaron varias citaciones que desvirtúan el desconocimiento afirmado por la parte demandante desvirtuando su posición.

Con tales condiciones probatorias, ningún éxito le corresponde a la acción porque al proceso no se allegó ninguna prueba que acredite las afirmadas alteraciones emocionales, como tampoco el daño, la violencia y el abandono que eventualmente padecen la menor, pues las valoraciones allegadas son contestes en ratificar que tanto el actor como la demandada, cuentan con la idoneidad y aptitud suficientes para ocuparse del cuidado de aquella en cuanto ninguno padece trastorno como tampoco deficiencia que así lo impida porque se echa de menos la prueba del traumatismo, el abandono y maltrato y de contera la posibilidad de alterar sus actuales condiciones de vida, porque las mismas, son idóneas y permiten en lo mínimo contar con las expectativas mínimas que posibiliten un adecuado proceso de crecimiento y formación.

En lo que corresponde a las pruebas recopiladas, particularmente las aportadas por la parte demandante en su escrito de acción, de ninguna manera se puede consentir que las reiteradas demandas, administrativas o judiciales, sean constitutivas de alteraciones emocionales o psicológicas y constitutivas del maltrato reclamado pues las denuncias, quejas, solicitud de protección o denuncias, reportan el interés de superar la controversia al acordarse la custodia de la menor, un régimen de visitas y el pago de una cuota alimentaria mensual.

En tales condiciones ciertamente existen variadas acciones promovidas por la demandada contra el actor, pero a diferencia de la consideración dispuesta en la demanda, estas antes que constituir una actitud caprichosa, molesta y retaliatoria, en lo que genera su contenido, evidencian la preocupación, el interés y el ejercicio de la parte demandada en cumplir sus obligaciones al procurar la interacción con aquellos, explicando la convocatoria dispuesta a iniciativa de la demandada para restaurarse el régimen de visitas, porque las acciones desplegadas, no son demostrativas de otra condición que la de ejercer los derechos que precisamente otorga la custodia de la menor y por ello sin acreditarse el trastorno emocional, el abandono y el maltrato reclamados con la demanda, no queda otra determinación que la de absolverla de las pretensiones, en cuanto se incumplió la carga de acreditarlas.

Las condiciones reportadas por las pruebas allegadas, en manera alguna acreditan el supuesto de hecho requerido por las causales reclamadas, y no obstante que se aluden inconvenientes y la reticencia en el cumplimiento del régimen de visitas y prohibición discontinua de la cuota alimentaria, la ocurrencia del mismo antes que posibilitar el descuido reclamado, evidencian algún afán y propósito de la parte demandada para interesarse por la suerte de la menor. Pero todo esto, se repite, corresponde a las simples hipótesis y un campo conceptual especulativo, pues lo cierto es que ningún medio probatorio, o por lo menos de los aportados al proceso, acreditan el supuesto maltrato dispensado a ANDREA NICOL POSADA GONZALEZ.

En suma, carece el proceso del elemento probatorio que permita respaldar las pretensiones, por lo menos en cuanto a las causales del maltrato y el abandono e incumplimiento de los deberes como progenitora que le corresponde a la parte demandada, pues de las no muy pocas pruebas, la documental aportada, no se evidencia su ocurrencia, ni la existencia de impedimento alguno que determine removerla en la custodia. Indudablemente las controversias presentadas, las discusiones y desavenencias reprochables si se quiere, de quienes se espera un modelo de comportamiento, en manera alguna, no configura ninguna de las causales dispuestas por el legislador para removerla en sus derechos, pues cuenta la parte demandante con mecanismos legales para forzarla al cumplimiento de los alimentos, que, como asunto ajeno al presente proceso, no puede abordarse en forma oficiosa. -

DE LA CONDENACION EN COSTAS

Vista la prosperidad de la acción desplegada, se proveerán de acuerdo a las circunstancias del artículo 361 del Código General del Proceso y el acuerdo N° PSAA16-10554 de septiembre 5 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se abstendrá el despacho en imponerlas en cuanto al incumplirse las reglas del artículo 365 del Código General del Proceso, que solo las autoriza al encontrarse acreditadas y en la medida de su comprobación.

Por lo expuesto. el **JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA**, por autoridad de la Ley:

RESUELVE

NEGAR las pretensiones propuestas por la parte demandante PABLO ANFRÉS POSADA VASQUEZ, contra la parte demandada DOLFY YANETH GONZALEZ RUBIO en el trámite del proceso VERBAL SUMARIO DE CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL que le promovió sobre la custodia, cuidado definitivo y exclusivo de la menor ANDREA NICOL POSADA GONZALEZ, en las condiciones expuestas. -

ABSTENERSE de imponer costas por el trámite de la instancia.

CÓPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

El Juez

JOSÉ EUSEBIO VARGAS BECERRA

Firmado Por:

Jose Eusebio Vargas Becerra

Juez Municipal

Juzgado Municipal

Civil 001

Madrid - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a2c2b7bdd7bed19dc3e04315a8e217cc676d2cd6fbd251482b87bd58cbfb99ee**

Documento generado en 03/07/2023 11:55:54 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>